

Las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia www.360geopolitica.org

El ciclo electoral de Colombia en 2026 constituye un momento decisivo para las instituciones democráticas y la gobernabilidad del país. Las elecciones legislativas del 8 de marzo determinarán la composición del Congreso, seguidas por la elección presidencial el 31 de mayo, con una eventual segunda vuelta el 21 de junio. En conjunto, estos comicios definirán la trayectoria política e institucional de Colombia para el período 2026-2030.

Contexto

Las elecciones de 2026 se desarrollan en medio de una profunda erosión de la autoridad del Estado, el afianzamiento de grupos armados ilegales en amplias regiones y una escalada de la violencia política. La política de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro ha intensificado estos desafíos, desmantelando los mecanismos tradicionales de disuasión, envalentonando a actores criminales y permitiendo al menos 20.000 muertes a medida que los grupos armados se expandieron bajo su administración.

Las alianzas políticas de Petro se extienden más allá de Colombia, incluyendo vínculos con el régimen de Maduro y redes criminales transnacionales como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, así como grupos armados colombianos y venezolanos. Estas redes podrían estar proporcionando apoyo financiero a la coalición de Petro, influyendo directamente tanto en las campañas legislativas como presidenciales de 2026.

En el plano internacional, Petro ha cultivado conexiones con actores vinculados a Rusia, Irán y Turquía, así como con gobiernos y corporaciones de Portugal, Suecia y España que se han beneficiado de contratos multimillonarios del Estado colombiano de dudosa legalidad. Estas alianzas nacionales e internacionales han otorgado a su movimiento ventajas significativas, socavando la competencia democrática en 2026.

Las preocupaciones sobre la integridad electoral se han intensificado tras los hallazgos del Consejo Nacional Electoral de que la campaña de Petro en 2022 violó las normas de financiación, lo que dio lugar a sanciones en noviembre de 2025. Estos problemas se vieron agravados por una

investigación de *Noticias Caracol* que reveló contactos entre disidencias de las FARC y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Ejército colombiano, lo que sugiere infiltración en las instituciones de seguridad del Estado.

Documentos, comunicaciones y chats interceptados implican a altos mandos disidentes y plantean serias dudas sobre la integridad del aparato de inteligencia de Colombia. Presuntamente, la campaña de Petro en 2022 recibió financiación de disidencias de las FARC en Colombia y Venezuela, canalizada a través de la vicepresidenta Francia Márquez.

Estas revelaciones han generado escrutinio público y denuncias legales formales, con la Fiscalía General de la Nación confirmando la autenticidad del material y aumentando las preocupaciones sobre influencia ilegal y violaciones a la financiación de campañas.

Estos riesgos se ven agravados por evidencias que vinculan a personas cercanas a Petro con violencia política selectiva. Investigaciones sugieren que el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue orquestado por la disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia, presuntamente a través de intermediarios criminales.

La convergencia entre negociaciones de paz, redes criminales y violencia política pone de relieve amenazas graves para las instituciones democráticas, la integridad electoral y la seguridad pública de Colombia de cara a las elecciones de 2026.

Entorno de seguridad

Las fuerzas de seguridad de Colombia atraviesan su momento más débil desde la era del Plan Colombia. En los últimos tres años, la administración Petro ha retirado o destituido al 40 % de los generales del Ejército y a más de la mitad de los generales de la Policía, sustituyendo a líderes experimentados por oficiales alineados políticamente, pero con menor trayectoria. Esto ha erosionado la experiencia institucional, alterado las cadenas de mando y debilitado las capacidades antidrogas y antiterroristas. La Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) ha perdido oficiales de alto nivel con experiencia clave en la cooperación con socios estadounidenses, creando una brecha de conocimiento.

La estrategia de “Paz Total” ha debilitado aún más la seguridad. Desde 2022, las operaciones militares contra grupos armados prácticamente se han detenido y los programas de erradicación de coca se han suspendido en favor de negociaciones. Colombia se ha convertido en el principal productor mundial de coca, los grupos armados han ampliado su control territorial y los diálogos de paz se encuentran en gran medida estancados. Poner fin a la asistencia de Estados Unidos –algo que Petro ha buscado públicamente– agravaría esta crisis.

La financiación y el apoyo en inteligencia, que superaron los 60 millones de dólares solo en 2024, son fundamentales para la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad colombianas para enfrentar al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Sin este respaldo, es probable que se intensifiquen la violencia, la extorsión y el desplazamiento entre los más de siete millones de desplazados internos del país.

Dos realidades preocupantes ilustran la distorsión moral y política del enfoque de seguridad de Petro. En primer lugar, se ha referido al ELN, un grupo armado ilegal, como “hermanos y hermanas”, creando una alarmante equivalencia entre actores estatales y criminales. En segundo lugar, cuando criminales peligrosos son capturados o neutralizados, la administración Petro y el Pacto Histórico los presentan como “personas pobres” o “jóvenes pobres”, enmarcando a los perpetradores como víctimas y legitimando a los socios de la Paz Total. Entre 2018 y 2022, instituciones internacionales contribuyeron a esta narrativa, profundizando la polarización social.

La violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales –muchos asociados a la Iniciativa de Paz Total de Petro– continúa devastando a las comunidades colombianas, en particular a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos rurales y residentes urbanos.

Solo en 2024, 252 personas murieron en 72 masacres, 89 defensores de derechos humanos fueron asesinados y 216 niños fueron reclutados por grupos armados. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al gobierno a proteger a la población civil, prevenir el reclutamiento infantil y cumplir el Acuerdo de

Escazú, subrayando la importancia de los derechos humanos y las salvaguardas ambientales. De manera alarmante, los grupos armados y el crimen organizado controlan al menos el 75 % del territorio colombiano, dejando vastas áreas fuera de la supervisión gubernamental o internacional.

Panorama legislativo y presidencial

Las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026 se perfilan como una contienda fragmentada y altamente competitiva. Un total de 1.124 candidatos están inscritos para 108 escaños del Senado, mientras que 2.107 candidatos compiten por 188 curules en la Cámara de Representantes, lo que refleja una intensa movilización política y la continua atomización partidista.

La carrera presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026, sigue siendo fluida mientras se finalizan las candidaturas. Los aspirantes pueden acceder a la papeleta mediante aval partidista, recolección de firmas ciudadanas o consultas internas, con el registro formal previsto hasta el 13 de marzo de 2026. La ausencia de una consolidación temprana entre bloques ideológicos pone de relieve un escenario electoral dinámico e incierto.

Varios dirigentes se perfilan para competir en las elecciones del 31 de mayo, entre ellos Sergio Fajardo como alternativa centrista moderada, Paloma Valencia como abanderada de la oposición conservadora y Abelardo de la Espriella con una candidatura outsider de derecha mediante recolección de firmas. En la izquierda radical, Iván Cepeda representa la continuidad del proyecto Petro-Pacto Histórico. Este panorama está lejos de ser definitivo.

Los candidatos alineados con Petro ingresan a la contienda con una ventaja financiera y operativa decisiva. La financiación de fuentes ilícitas, el acceso preferencial a contratos públicos y el respaldo de grupos armados y redes criminales dentro de la Iniciativa de Paz Total otorgan a la coalición de Petro una ventaja significativa. Estos actores presionan activamente a las comunidades e influyen en el comportamiento electoral, socavando aún más la competencia democrática.

La alineación de Petro y Cepeda con estrategias propias de la era de Maduro refleja una lealtad coordinada a un régimen sustentado por redes criminales. Grupos como el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, el ELN, la Segunda Marquetalia,

el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC operan bajo el marco de la Paz Total, disponiendo de recursos, personal y control territorial suficientes para asegurar victorias tanto presidenciales como legislativas. Esto no es un proceso democrático; es poder organizado consolidándose mediante coerción, influencia financiera y control sobre las poblaciones locales.

El patrón es claro: las elecciones de 2022 demostraron la capacidad de la coalición para

aprovechar estas redes y alcanzar el poder. Hoy, la evidencia creciente implica al crimen organizado en el sostenimiento de estos resultados, y aun así Petro y Cepeda permanecen comprometidos con mantener el control a través de los mismos mecanismos. Su objetivo no es la gobernanza democrática, sino la preservación del poder.

Bogotá, Colombia, 18 de diciembre de 2025.